

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°093

Medellín, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **GUILLERMO LEÓN VASQUEZ ORTÍZ** contra **PORVENIR S.A., SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.** y la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se declare la nulidad de los dictámenes expedidos por **Seguros de Vida Alfa S.A.** y la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** y en su lugar se declare que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad del actor fue el 12 de marzo de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, se condene a **Porvenir S.A.** a reconocer y pagar la pensión de invalidez y los intereses moratorios, o en subsidio, la indexación de las condenas.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que es afiliado a **Porvenir S.A.** y que fue calificado por **Seguros de Vida Alfa S.A.** y la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** con una pérdida de capacidad laboral del 50.10% estructurada desde el 19 de junio de 2018.

Mediante dictamen efectuado por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, se determinó que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 12 de marzo de 2016.

En los tres años anteriores a la fecha de estructuración determinada por el dictamen pericial cuenta con 50 semanas de cotización, por lo que solicitó a **Porvenir S.A.** el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, petición a la que no ha recibido respuesta a la fecha de presentación de la demanda.

Respuesta Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia

Esta entidad a través de apoderado expreso que son ciertos los hechos, desconociendo lo referente a la calificación a la que se sometiera el actor con posterioridad a la emisión de su dictamen.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: validez del dictamen, determinación de la fecha de estructuración ajustada a derecho, inexistencia de obligación de reconocimiento de la pensión de invalidez, buena fe, ausencia de causa para pedir y estado clínico del paciente pudo variar con posterioridad a la calificación.

Respuesta Seguros de Vida Alfa S.A.

Seguros de Vida Alfa S.A. a través de apoderada manifestó que son ciertos los hechos, excepto el que tiene que ver con la falta al deber de información, pues esa AFP suministro una asesoría oportuna, pertinente, objetiva y comprensible a la actora.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, y aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones.

Sentencia de primera instancia

El Juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **14 de marzo de 2023**, declaró que la invalidez del demandante se estructuró desde el 12 de

marzo de 2016, por considerar que para esa fecha que coincide con la del accidente común que sufrió el trabajador, se presentó un “hecho contundente” que generó su pérdida de capacidad, sustentando sus consideraciones en el peritaje allegado con la demanda al cual concedió plenos efectos probatorios.

Como consecuencia de lo anterior, consideró que el actor satisfacía el requisito de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez y condenó a **Porvenir S.A.** a reconocer y pagar la pensión de invalidez desde el 12 de marzo de 2016, no obstante, por efectos de la prescripción indicó que la prestación debe reconocerse desde el 6 de mayo de 2016, adeudando entre esta fecha y el 14 de marzo de 2023, la suma de hasta el **\$75'675.731**, sobre este valor autorizó el descuento de las cotizaciones en salud y e impuso a la AFP la obligación de indexarlo al momento del pago.

Esta decisión no la compartió el apoderado de la parte demandada, motivo por el cual la impugnó en los siguientes términos:

Recurso Porvenir S.A.

El apoderado recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, toda vez que, conformidad con la prueba traída al proceso (declaración de parte y dictamen pericial) se dio cuenta que las secuelas que en la actualidad padece el demandante aparecieron con posterioridad al accidente que sufrió el 12 de marzo de 2016, lo que tiene sustento en una evaluación de profesional en neurología.

Destaca que de conformidad con lo confesado por el actor las secuelas mentales aparecieron con posterioridad a la fecha en la que salió de hospitalización.

Bajo ese horizonte la conclusión del perito que señala que la fecha de estructuración en el caso de accidentes coincide con la ocurrencia de estos, constituye una apreciación subjetiva que desconoce el mandato del artículo 3 del Decreto 1507 de 2014 cuando establece que la condición de invalidez se determina con base en la evolución de las secuelas.

Finalmente, señala que el perito para la determinación de la pérdida de capacidad son los avalados por el Decreto 019 de 2012, sin que pueda desconocerse esta regulación bajo el argumento de que en el trámite del proceso cualquier experticia puede controvertirlos.

En lo referente a la indexación de las condenas, destaca que no se debió imponer como quiera que la cuenta de ahorro individual del demandante ha generado unos rendimientos.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, el apoderado de **Porvenir S.A.** presentó alegaciones en las que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, reiterando que la historia clínica del demandante da cuenta de la aparición de secuelas luego del accidente, por lo que no puede establecerse que la pérdida de la capacidad laboral se estructuró en el mismo momento de su ocurrencia.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso de apelación interpuesto, serán: (i) Establecer si el estado de invalidez del señor **Guillermo León Vásquez Ortiz** se estructuró con anterioridad a la fecha determinada por **Seguros Alfa S.A.** y la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** y en ese sentido si es posible acoger el dictamen proferido por la **IPS Universitaria** en el que se indica que la misma coincide con la fecha en que sufrió accidente común, (ii) Determinar si el demandante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez y (iii) si procede la indexación de las condenas.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. El señor **Guillermo León Vásquez Ortiz** es afiliado a **Porvenir S.A.**, AFP a la cotizó 54 semanas entre los ciclos octubre 2014 y noviembre de 2015 (02/pág.40).
2. En evaluación neuropsicológica practicada el 19 de junio de 2018, se concluyó que el actor “...muestra compromiso cognitivo moderado, generalizado, además de secuelas afectivo-comportamentales, que pueden entenderse como secuelas del TEC” (02/págs.41-50).

3. Con motivo de accidente común fue calificado en primera oportunidad mediante dictamen del **10 de julio de 2018** emitido por **Seguros de Vida Alfa S.A.** entidad que le asignó al señor **Vásquez Ortiz** una pérdida de capacidad laboral del 50,10% estructurada desde el 19 de junio de 2018, sustentado se experticia en lo referente a la fecha en que para ese momento se dio el reporte de pruebas neurológicas en las que se fundamentan las secuelas (02/págs.30-34).
4. Frente a esta decisión el actor planteo su controversia conociendo de la misma la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** que en dictamen del 5 de septiembre de 2018, confirmó la decisión debatida, indicando que la decisión se soportaba en la historia clínica en concreto en las pruebas neuropsicológicas del año 2018 (01/págs.35-37).
5. En dictamen expedido el **27 de abril de 2019**, el médico José William Vargas Arenas, indicó que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 12 de marzo de 2016, conclusión que justificó que la pérdida de capacidad coincide con la fecha en que el actor sufrió accidente, puesto que, desde ese evento súbito “...no ha presentado recuperación no obstante el tratamiento” (02/págs.17-20).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

De la eficacia del dictamen pericial para modificar la fecha de estructuración del estado de invalidez

No se discute en el presente proceso que el señor **Guillermo León Vásquez Ortiz** se encuentra en estado de invalidez como quiera que tiene una pérdida de capacidad del 50,10%, estando la controversia en establecer la fecha de estructuración de este porcentaje, siendo aceptada por el juez de primera instancia la data propuesta por el dictamen pericial aportada con la demanda, por considerar que la invalidez en este caso se deriva de un “evento contundente” como fue el accidente sucedido el **12 de marzo de 2016**.

Esta conclusión es debatida por el apoderado de **Porvenir S.A.** argumentando que esta pericia desconoce el concepto de “fecha de estructuración” establecido por el artículo 3° del Decreto 1507 de 2014 –Manual Único de Calificación de Invalidez” cuando indica que la misma se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos, de tal suerte que el

criterio objetivo para la fijación de la fecha es aquella en que no existe posibilidad de recuperación.

En lo que refiere a este argumento, advierte esta Sala que en efecto el Manual de Calificación con base al cual se determinó la pérdida de capacidad laboral del actor establece que la fecha de estructuración se determinará con base en la evolución de las secuelas, siendo necesario por lo demás que esta fecha se soporte “...en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral”.

Esta afirmación por lo demás encuentra soporte en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-1193-2015, de conformidad con la cual la fecha de estructuración de la invalidez no siempre coincide con la del accidente, pues las secuelas se pueden manifestar con posterioridad, sobre este aspecto dijo el Alto Tribunal:

Y es que, según se analizó en precedencia, puede suceder que luego de ocurrido un accidente que genere algún tipo de pérdida de la capacidad laboral se intente recuperar dicha capacidad a través de diferentes tratamientos médicos y terapéuticos, que en no pocas ocasiones pueden resultar exitosos. Pero solo cuando tales tratamientos no repercuten en una mejoría del estado de salud del afiliado, o por cualquier motivo se renuncia a ellos, es que se estructura la invalidez. Es decir, la invalidez se estructura, no necesariamente en la fecha del siniestro, sino en la fecha en que se determine que no existen posibilidades de mejoría o curación del paciente, como en este caso, donde ante la falta de eficacia del tratamiento terapéutico y farmacológico suministrado al actor (Folios 37 a 47), se toma una medida como la amputación del miembro afectado.

En ese sentido es evidente que una discusión de cara a la fecha de estructuración debía ser soportada en un análisis de exámenes clínicos y ayudas diagnósticas en las cuales se soportara que el señor **Vásquez Ortiz** desde el momento en que sufrió el accidente no tenía posibilidad de curación y por eso desde ese momento se estructuró la invalidez, condición de la que adolece el dictamen presentado con la demanda y realizado por el Dr. **José William Vargas Arenas**, puesto que, la conclusión fue que el actor desde ese evento súbito “...no ha presentado recuperación no obstante el tratamiento” (02/págs.17-20), sin embargo, el mismo no descarta el contenido de la historia clínica que da cuenta del adelantamiento de tratamientos médicos para la recuperación de la condición de salud, sustentando su afirmación en que desde

el momento del accidente el actor no ha presentado la posibilidad de reintegro laboral, lo que a juicio de esta Sala crea una confusión entre dos conceptos el de incapacidad para laborar y el de secuela, siendo la primera temporal y la segunda definitiva, puesto que, conforme con los avances de la ciencia médica se advierten pocos o nulas posibilidades de recuperación.

Es con fundamento en lo anterior que encuentra la Sala que el dictamen presentado y en el que se apoyó el juez para modificar la fecha de estructuración no cumple con una sustentación contundente que permita desestimar la eficacia de los dictámenes expedidos por **Seguros de Vida Alfa S.A.** y **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** y en ese sentido se encuentra que la fecha determinada por esas entidades resulta correcta por cuanto se soporta en la historia médica del demandante, en particular en el informe de evaluación neuropsicológica realizada el **19 de junio de 2018**, que da cuenta de un inicio de sintomatología depresiva en marzo de 2016 cuyas secuelas cognitivo comportamentales fueron establecidas en la última fecha (03/págs.41-50).

Pese a lo anterior, es necesario que esta Sala indique que pese al error en que incurrió el perito, no se puede desconocer que el legislador estableció en el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que cuando la invalidez fuera causada por accidente, las 50 semanas necesarias para acceder a la pensión deben contabilizarse “...dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”, lo anterior teniendo en cuenta precisamente que las secuelas pueden aparecer con posterioridad y luego un periodo en que el trabajador estuvo imposibilitado para laboral.

Lo expresado implica que en el accidente la fecha para el conteo de las semanas no es la estructuración de la invalidez sino el momento en que ocurre el mismo, tesis bien explicada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 23 de febrero de 2007, radicación 29968, en la que expreso:

La distinción hecha por el Legislador tiene una clara justificación de orden lógico y práctico. En efecto, no es lo mismo la invalidez derivada de una enfermedad común que la de un accidente. La dificultad de precisar, en el primer caso, cuál fue el día en que se originó la morbilidad conlleva a que sólo el dictamen médico de la Junta competente establezca una fecha aproximada, que es la de estructuración del estado patológico. En cambio, el accidente es un hecho aprehensible por los sentidos, de fácil demostración. Y por razones de orden práctico y de elemental justicia también es obvio darle

un tratamiento distinto a las dos situaciones, porque, como lo admite expresamente el operador, la invalidez indefectiblemente no se produce el día del accidente, sino que puede ser posterior a éste, pero si se dictamina por los expertos que ella es secuela del infortunio ya conocido por existir el registro documentado de su ocurrencia, o evidenciado por cualquier otro medio probatorio, ninguna dificultad hay en saber cuál fue el día en que se generó la discapacidad. Ahora, si una persona sufre un accidente, de riesgo común, o por causa del trabajo, y mientras va sufriendo poco a poco el deterioro de su salud, no consigue empleo y deja de cotizar al sistema, no se acompasa con los principios de la seguridad social, que pierda efectividad la densidad de cotizaciones alcanzada hasta el día en que sufrió el accidente.

La diferenciación hecha por la ley es única y exclusivamente, como se ve, para marcar el día de inicio de contabilización de los aportes al sistema de la seguridad social. No así, para comenzar a pagar la pensión que llegare a estructurarse posteriormente, porque ella se debe, “desde la fecha en que se produzca tal estado”, conforme al artículo 40 in fine de la Ley 100 de 1993. Es decir, puede ser retroactiva a la fecha de la experticia, pero no necesariamente desde el día del accidente, por cuanto –se itera- es posible que la disminución definitiva de la capacidad laboral del beneficiario emerja en momento posterior a la contingencia sufrida. He allí la razón para que la revisión de la pensión de invalidez autorizada por el artículo 44 ibídem también se extienda a su favor, quien puede solicitar “el aumento de la misma, si a ello hubiere lugar” (literal a), y así deberá ordenarlo la entidad administradora del régimen solidario, en el sistema de prima media con prestación definida (parágrafo del artículo 17 del Decreto 1889 de 1994). Además, no ha de olvidarse que no se puede disfrutar de la pensión mientras el afiliado esté recibiendo subsidio por incapacidad temporal (artículo 3° del Decreto 917 de 1999). Por lo mismo, el pago de esta pensión sólo comienza a partir del día en que de manera definitiva se estructure la invalidez, conforme al dictamen de la autoridad competente.

A partir de lo manifestado, es evidente para esta Sala que al tratarse de un accidente que generó como secuelas las calificadas **Seguros de Vida Alfa S.A.** y **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia**, la contabilización para efecto de las cotizaciones debe realizarse en los 3 años anteriores a los que el actor sufrió el evento súbito, esto es, el **12 de marzo de 2016**.

Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y la fecha desde la cual debe reconocerse el pago de la mesada pensional

Teniendo en cuenta que el supuesto aplicable al demandante es el del numeral 2 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, se debe determinar si entre los tres años anteriores al **12 de marzo de 2016** cuando sufrió accidente catalogado como común tenida cotizadas 50 semanas, condición que se cumple habida cuenta que entre los ciclos de octubre 2014 y noviembre de 2015 cotizó 54 semanas (02/pág.40), por lo que, aunque por razones diferentes se **confirmará** la decisión de primera instancia.

Pese a lo anterior situación, la aplicación de la norma conforme el entendimiento dado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 23 de febrero de 2007 -antes trascrita- implica que deba ser **modificada** la fecha desde la cual se concede el retroactivo pensional, puesto que, la misma debe ser fijada desde el **19 de junio de 2018** por ser esta la fecha de la estructuración del estado de invalidez, encontrándose que el valor que por retroactivo adeuda **Porvenir S.A.** al demandante entre esta fecha y el **14 de marzo de 2023**, asciende a la suma de **\$ 55.622.576**.

Retroactivo pensional			
Año	# mesadas	Valor pensión	Total
2018	7 y 12 días	\$ 781.242	\$ 5.781.191
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	2 y 14 días	\$ 1.160.000	\$ 2.853.600
TOTAL			\$ 55.622.576

De la procedencia de la indexación de las condenas

En la medida que fueron negados los intereses moratorios, y en el entendido que es necesario paliar los efectos adversos producidos por la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones y compensar el efecto inflacionario que sufre el valor de las mesadas pensionales por el paso del tiempo, resulta acertada la imposición del juez a-quo a cargo de **Porvenir S.A.** de indexar cada una de las mesadas adeudadas atendiendo a la fecha de su causación (CSJ SL185-2019), por lo que en este punto se **confirmará** la decisión apelada.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, aunque por razones diferentes la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el día **14 de marzo de 2023**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **GUILLERMO LEÓN VASQUEZ ORTÍZ** contra **PORVENIR S.A., SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.** y la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** en cuanto concedió la pensión de invalidez al demandante.

SEGUNDO: MODIFICAR el literal a) del numeral segundo de la decisión de primera instancia en cuanto a la fecha de causación del derecho y el consecuente valor del retroactivo adeudado para en su lugar indicar que desde **19 de junio de 2018** y hasta el **14 de marzo de 2023**, **PORVENIR S.A.** le adeuda al señor **GUILLERMO LEÓN VASQUEZ ORTÍZ** la suma de **\$55.622.576**.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS




CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado 05001-31-05-002-2019-00331-01
Radicado Interno: P0672323
Asunto: Confirma y modifica sentencia

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a trailing line.

GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Guillermo León Vásquez Ortiz
Demandado (s)	Porvenir S.A., Seguros de Vida Alfa S.A. y Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
Radicado	05001-31-05-002-2019-00331-01
Decisión	Confirma y modifica sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona


El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 25 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 25 de mayo de 2023 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO